

VOLVER A LOS ACTORES ANTIDEMOCRÁTICOS

ALBERTO VERGARA

Profesor en la Universidad del Pacífico (Lima, Perú)

AARÓN QUIÑÓN

Investigador del grupo sobre Estado y Sociedad en la Pontificia
Universidad Católica del Perú

INTRODUCCIÓN

Cuando América Latina se democratizó a fines de la década de 1970 e inicios de la década de 1980, el paradigma intelectual que prevaleció para entender dichos fenómenos fue uno centrado en los actores políticos, sus estrategias y valores (O'Donnell y Schmitter, 1986). Esta opción respondía a una constatación evidente: las estructuras sociales y económicas de la región no habían cambiado esencialmente y, sin embargo, en un breve lapso el continente pasó de estar plagado de autoritarismos a tener elecciones democráticas en la gran mayoría de ellos. Con bastante lógica, el foco de análisis debía posarse sobre los actores.

Con el paso del tiempo, este énfasis fue cediendo. Para dar cuenta de las democracias latinoamericanas que sobrevivían sin fortalecerse, ya no era suficiente observar los actores. Más bien, su estancamiento se explicaba mejor por otro tipo de variables: la incapacidad estatal, la desigualdad, la influencia de factores internacionales o la debilidad creciente de

los partidos políticos. Así, las claves para entender nuestras “democracias de baja calidad” se trasladaron de los actores a los límites institucionales, sociales y económicos que enfrentaban. Se daba por descontado que la democracia no avanza debido a factores ajenos a sus actores principales.

En la última década, América Latina enfrenta nuevos cambios políticos. Si bien no hemos regresado a ser un continente dominado por dictaduras, sí se puede decir que la democracia en la región no prospera. Si observamos la data proveniente de las entidades internacionales que miden y categorizan los régimenes políticos en el mundo (en especial, *V-Dem* y *The Economist Unit Intelligence*), encontramos que, a grandes rasgos, hay dos tendencias respecto de la situación de la democracia en América Latina: hay un grupo de países donde la democracia se encuentra estancada en alguna forma de democracia mediocre y hay otro grupo en el que las democracias mediocres se degradaron a formas no democráticas (o bien a algún tipo de autoritarismo o de régimen híbrido: en cualquier caso, dejaron de ser democracias). Entonces, vivimos una época en la que las democracias latinoamericanas o bien están estancadas o bien colapsan; ¿por qué?

Para responder a esta pregunta, en este artículo volvemos a los actores políticos. En especial, queremos mostrar que, más allá de las variables sociales, institucionales y económicas, si la democracia se debilita en América Latina es porque en el siglo XXI se han fortalecido los actores antidemocráticos. En un reciente artículo, Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán (2023) —quienes por mucho tiempo han puesto el acento en los actores y sus valores para comprender los régimenes políticos— aluden a los “actores adversos a la democratización”, como instancias que deben ser pensadas en el estudio de la democracia. En dicha línea, en este artículo subrayamos cómo en los últimos años muchos actores pasaron del escépticismo respecto de la profundización de la democracia a ser actores antidemocráticos. La desdemocratización en América Latina no se comprende sin la importancia cobrada por estos actores antidemocráticos.

Por ello resaltamos que los países en la región han visto la aparición de *nuevos* actores que se suman a los viejos actores adversos a la democracia. Identificamos actores que actualmente no solo son escépticos del régimen democrático, sino que buscan erosionarla.

Viejos conocidos: militares y populistas

Si la democracia liberal no cuajó en América Latina durante el siglo XX, mucho tiene que ver con la presencia de dos actores que no la querían: los militares y los populistas. Sin embargo, cuando llegaron las transiciones a la democracia en la década de los ochenta y luego las reformas neoliberales, se pensó que estos dos actores dejarían de ser una presencia antidemocrática en la región. Y durante algunos años esto pareció cumplirse. Los militares ya no han dado tantos golpes de Estado como en el pasado y el populismo por un tiempo pareció estar de retirada. Pero en el siglo XXI, en algunos países y en algunas circunstancias, militares y populistas vuelven a jugar un papel poco democrático o de plano antidemocrático.

Por lo pronto, empecemos notando que en todos los casos de quiebre de la democracia luego de las democratizaciones constatamos una participación activa de las fuerzas armadas. El régimen autoritario de Alberto Fujimori en el Perú (1992-2000) fue identificado como uno “cívico-militar”; el de Hugo Chávez (él mismo provenía del Ejército) estableció una alianza clave con los militares que se mantiene hasta hoy; el régimen de Daniel Ortega se asienta también en una estructura militar que ha sido politizada para construir un autoritarismo. La situación es análoga en El Salvador, donde los militares son parte del régimen liderado por Nayib Bukele, quien ha terminado con la precaria democracia salvadoreña. Así, ahí donde la democracia se quebró los militares han sido pieza activa.

En otros casos, encontramos al actor militar como contrario a la democracia aun cuando no se aboque a construir un régimen autoritario. Por ejemplo, en 2009 se dio un golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras donde los militares fueron relevantes. También han jugado un papel preocupante para la democracia brasileña, acompañando muchos a un presidente como Jair Bolsonaro (2018-2022), que elogia la dictadura (1964-1985) y sus violaciones de derechos humanos. En Guatemala, la democracia se ha degradado en el último quinquenio hasta constituir lo que el politólogo Omar Sánchez-Sibony (2023) llama un “autoritarismo de coalición”, y parte esencial de esa “coalición” son las fuerzas armadas con intereses económicos y también con especial interés para que descarrilen los procesos por violaciones de derechos humanos. Queda por ver si la sorpresiva elección de Bernardo Arévalo pondrá un punto final a esta tendencia.

Junto con la reaparición de los militares, cobran nueva fuerza los populistas. Probablemente, en realidad, nunca se fueron. En el siglo XXI se difundieron rápidamente a la sombra de Hugo Chávez, quien había llegado al poder en 1999. Pero no queremos detenernos en los nombres conocidos de aquella ola (Evo Morales, Rafael Correa, los Kirchner), sino en populismos más recientes que, además, han confirmado que el populismo no tiene preferencias ideológicas y puede producirse también en la derecha. Los dos ejemplos más novedosos en este espectro político son el salvadoreño Nayib Bukele y el costarricense Rodrigo Chaves. El primero logró construir un régimen de devoción personalista en apenas unos meses en el poder. El hartazgo ciudadano con el *statu quo* y el *establishment* partidario permitió la emergencia de esta figura carismática y juvenil apoyada en las redes sociales. Aunque su retórica populista comenzó asociada a un proyecto de futuro tecnológico y milenial —especialmente con el proyecto Bitcoin City—, como señalan los polítólogos Harry Brown y María Esperanza Casullo (2023), el éxito mayor le llegó cuando migró a otra narrativa, la de la seguridad ciudadana contra las maras y el crimen. Y sobre la retórica llegó un hecho macizo que no puede escamotearse sin más: barrios enteros se liberaron de la opresión pandillera. En el camino —tampoco puede escamotearse— El Salvador perdió su precaria democracia. Bukele se hizo de todo el poder, con el Legislativo y Judicial sometidos a la voluntad del Ejecutivo. Como ha ocurrido en mil lugares, un pueblo atormentado por la violencia prefirió la seguridad a la libertad. Aunque los salvadoreños están hoy satisfechos con su juvenil dictador, algún día dejará de ser juvenil y popular, pero será difícil que deje de ser dictador. Fue reelecto contraviniendo la Constitución; los mejores periodistas salvadoreños han tenido que partir al exilio y la dignidad y derechos humanos que eran violentados antes por las maras ahora lo son por parte de las Fuerzas Armadas.

Si bien el caso de Bukele podía anticiparse debido a niveles de violencia como los padecidos por la ciudadanía salvadoreña, la emergencia de un líder populista como Rodrigo Chaves en Costa Rica es más enigmática. Aunque su populismo no ha derivado en autoritarismo, como en El Salvador, esto pareciera deberse más a la capacidad de resistencia del sistema político *tico* que a la voluntad del presidente Chaves. Por lo pronto, como todos los populistas, está en una guerra permanente

contra el pluralismo, que se manifiesta en la agresión a las otras fuerzas políticas (todo el que se oponga pertenecería a “las argollas”), en atacar a los otros poderes del Estado y pelear cotidianamente con la prensa, a la cual tilda de “canalla”. Por el momento, las fuerzas políticas opositoras resisten, pues Chaves no tiene mayoría en el Legislativo y, recientemente, 27 expresidentes, incluyendo a seis de Costa Rica, firmaron una carta denunciando la voluntad populista y el ataque sistemático a la prensa por parte de Chaves. En la mejor tradición populista latinoamericana, respondió a la carta diciendo que esta era un “escupitajo a la bandera nacional”. El presidente mantiene una popularidad muy importante, por lo cual los enfrentamientos y choques entre la voluntad caudillista y la tradición republicana costarricense se anuncian múltiples y hondos.

La nueva derecha reaccionaria

Siguiendo una tendencia global, América Latina ha visto la emergencia de “nuevas derechas”. No se trata ya de una derecha neoliberal o pro-mercado como las que dominaron ese lado del tablero político en la década de 1990 y primera década del 2000, sino de una derecha reaccionaria cuya ambición principal es dar la “batalla cultural” contra todo lo que huele a “globalismo”, “derechos”, “ciudadanía” o, para ponerlo en los términos de Stefanoni (2021), una derecha definida por su “antiprogresismo”. Dentro de esta nueva derecha encontramos libertarios, neoconservadores, neopatriotas, entre otras posturas con sus propias convergencias y divergencias. Sin embargo, las agrupan posiciones frente a la democracia que oscilan entre el escepticismo y el rechazo.

Estas nuevas derechas reaccionarias se han hecho fuertes en el mundo de las redes sociales y, en algunos casos, han logrado vincularse a algunos candidatos que las han hecho salir del ámbito del radicalismo puramente virtual. El ejemplo paradigmático a nivel mundial es, desde luego, Donald Trump. Sus posturas políticas racistas y que reivindicaban un mundo tradicional cuando el hombre blanco era el ápice de la pirámide del poder norteamericano (ese tiempo cuando *America era great*) encontraron eco con un submundo virtual alimentado de conspiraciones, posverdades y anhelos de un regreso al orden tradicional.

En América Latina, quien más éxito ha tenido desde esta avenida política ha sido Jair Bolsonaro. Estuvo en la presidencia brasileña entre

2018 y 2022. Llegó con una agenda abiertamente reaccionaria, elogiando la dictadura (1964-1985) y sus violaciones de derechos humanos (“[los militares] tenían que haber matado por lo menos a unos 30 000”), denigrando a todas las minorías, desplegando un comportamiento misógino y poniendo en escena una mezcla de afición al integrismo evangélico y a las armas que entran en contradicción con valores centrales de la democracia. En un gesto inequívocamente antidemocrático, afirmó que enviaría a los opositores a “la punta de la playa”, una alusión a una base de la marina donde se torturaron y desaparecieron presos políticos durante la dictadura. Además, encontró en el intelectual Olavo de Carvalho, afincado en los Estados Unidos, un teórico político que daba sustento a sus posiciones y medidas reaccionarias. La “nueva derecha” y sus diversas vertientes le brindaron un apoyo social incondicional. Los clubes de armas se multiplicaron y dieron lugar a asociaciones dispuestas a amedrentar a la ciudadanía ajena al bolsonarismo.

A la postre, todo este despliegue social, político y simbólico de posturas antidemocráticas no logró derrotar a la democracia brasileña. Durante buena parte de su presidencia, Bolsonaro amenazó con desconocer los resultados electorales de 2022 si es que no conseguía su reelección. Y pocos días después de que Lula asumió la presidencia, miles de bolsonaristas intentaron un golpe de Estado al tomar los edificios del poder legislativo y judicial de Brasilia. El *putsch* fracasó, pero dejó en claro que el bolsonarismo no era simplemente una fuerza escéptica de la democracia, sino una contraria a la democracia.

Muchos otros políticos en la región han logrado conectar con las ideas y bases de esta nueva derecha continental, aun si no han conseguido el premio presidencial mayor. En Chile, José Antonio Kast desertó de la derecha tradicional (de la Unión Demócrata Independiente, UDI) para construir una postura más radical y *antiestablishment*, alcanzando la segunda vuelta presidencial en 2021. Aunque perdió, lo importante para nuestra argumentación es que él mismo y sus seguidores reivindican la dictadura de Pinochet. No se han convertido en sectores abiertamente antidemocráticos como en otros países, pero cargan con las convicciones e intenciones que en un escenario determinado podrían jugar más decididamente en contra de la democracia. Por el momento, la institucionalidad democrática chilena se mantiene sólida y un escenario como ese parece, si no impensable, muy lejano.

Algo semejante ha ocurrido con la candidatura de Javier Milei a la presidencia de la Argentina. Aunque suele ser presentado como un economista libertario y ultraortodoxo —o un “populista antiestatal”, como lo califica Gabriel Vommaro (2023)—, para nuestro análisis resultan importantes sus expresiones denigrando a la democracia, sus símbolos y procedimientos. Milei ha afirmado que la decadencia argentina comenzó en 1916. La fecha no es anecdótica, se trata del año en que se realizó la primera elección con voto universal masculino y secreto en la historia de la Argentina. Asimismo, más de una vez ha hecho saber que el peor presidente de la historia ha sido Raúl Alfonsín, el líder con el cual regresó la democracia en la Argentina en 1983. Para ser alguien supuestamente centrado en la economía, sus fobias transpiran drásticas posturas antidemocráticas. Tanto él como su candidata a la vicepresidencia Victoria Villaruel, además, han tenido expresiones que relativizan la importancia de las violaciones de derechos humanos por parte de los militares bajo la dictadura 1976-1983 (Vommaro, 2023). Este tipo de posición era impensable en la Argentina hasta hace un par de años.

La derecha peruana ha tenido un viraje semejante en un contexto democrático mucho más frágil que el chileno. Tanto el fujimorismo como el nuevo partido Renovación Popular, que ganó la alcaldía de Lima en 2022 (partido popularmente denominado “Renovación Medieval”), se han acercado a posiciones reaccionarias, estableciendo lazos con círculos globales de la “nueva derecha”, especialmente con Vox, el partido español, y llevando sus posiciones a las orillas de un conservadurismo extremo. Como ya hemos visto, dentro de este paquete antiprogresista entran de diversas maneras el rechazo a valores e instituciones fundamentales de la democracia. Por esta razón, no es casual ni sorprendente que cuando las elecciones de 2021 las ganó el candidato de izquierda radical Pedro Castillo, la derecha peruana liderada por Keiko Fujimori denunciara un fraude inexistente e intentase desacreditar y descartar un proceso electoral legítimo. Cuando un año y medio después el presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado, quedó claro que en el Perú el consenso democrático había volado por los aires: derecha e izquierda han desertado de los consensos que permiten que una democracia sobreviva.

En resumen, en la región hay una nueva derecha que hoy exhibe sus posturas antidemocráticas como no se veía una década atrás. Según

los contextos institucionales, estos nuevos “anti-progresismos” juegan distintos papeles. En algunos, son actores escépticos respecto de la democracia y en los más frágiles —y, en especial, cuando los países se polarizan— pueden devenir sus sepultureros.

Política predatoria y criminalidad

En varios países latinoamericanos en los últimos años han aparecido actores que juegan contra la democracia como una manera de mantener la capacidad regulatoria del Estado fuera de ciertos negocios. Estos negocios pueden ser formales, informales o ilegales, pero paulatinamente han penetrado el sistema representativo para blindarlos frente a la regulación estatal. Esto en sí mismo no es un atentado contra la democracia; es, en primera instancia, la erosión de un Estado de derecho abocado a regular las relaciones sociales desde la universalidad de la ley. O, para decirlo con el lenguaje de Max Weber, estamos, sobre todo, ante las fuerzas del patrimonialismo socavando un Estado burocrático.

Ahora bien, esta distinción analítica (democracia como algo distinto del Estado de derecho) se diluye al acercarse a la realidad latinoamericana. Porque estas distintas actividades que buscan burlar la regulación estatal no se limitan al mero *lobby* por fuera de la democracia, sino que ingresan a la política representativa y electoral para erosionar el imperio de la ley desde la política formal. Y, en casos extremos, estos actores pueden ser piezas centrales en el derrocamiento de las democracias.

Guatemala y Perú son dos países donde estos nuevos actores antidemocráticos han llegado más lejos. En 2023, Guatemala tuvo elecciones generales. Pero unas muy lejanas de cualquier estándar democrático. En primera vuelta, tres candidatos con reales opciones de hacerse de la presidencia fueron eliminados. De manera absolutamente sorpresiva, Bernardo Arévalo llegó a segunda vuelta y ahí derrotó a Sandra Torres, la candidata que encarnaba el sistema corrupto y autoritario prevaleciente. Y aquí hay que ser enfático: el triunfo de Arévalo no convierte a las elecciones guatemaltecas en una justa democrática. Arévalo ganó por azar, porque era tan marginal en las encuestas que la coalición mafiosa en el poder no se dio el trabajo de eliminarlo y cuando ya pasó a segunda vuelta la presión fue muy grande, nacional e internacionalmente, para que no se le eliminara.

¿En qué consiste la coalición que ha estado en el poder en Guatemala? Los guatemaltecos lo llaman “el pacto de corruptos”; Omar Sánchez-Sibony (2023) lo denomina un “autoritarismo de coalición”; Rachel Schwartz y Anita Isaacs (2023), “una oligarquía criminal”. Este es un régimen en el cual la formalidad de la democracia no ha sido abolida (en especial, un pluralismo aritmético en las elecciones: en primera vuelta hubo 22 candidatos), pero cuyo funcionamiento defrauda cualquier consideración democrática, con periodistas presos, políticos y funcionarios en el exilio y un amedrentamiento cotidiano a la oposición. Es decir, algo que se acercaba a lo que nosotros mismos hemos calificado como un “autoritarismo sin dictador” (Vergara y Quiñón 2023).

Una pata central de la coalición la constituye una diversidad de negocios formales, informales e ilegales que buscan capturar porciones del Estado para poder seguir funcionando sin interferencias regulatorias. Desde los empresarios tradicionales hasta las economías criminales, la democracia ha sido penetrada por “políticos” sin más interés que el de proteger negocios que, muchas veces, fructifican gracias a las relaciones poco santas entre política y dinero. De hecho, según la embajada norteamericana en comunicaciones que llegaron a la prensa, habría incluso partidos con una “ideología narco”. Esa coalición en el poder no solo erosiona la capacidad regulatoria del Estado, sino que, al buscárselo y conseguirlo, consiguió también hacer sucumbir la democracia guatemalteca.

En el Perú ocurre algo similar. De hecho, al igual que Guatemala, algunas entidades internacionales como *The Economist* ya no consideran que el país sea una democracia sino un “régimen híbrido” (y *Freedom House* considera a ambos como “parcialmente libres”). Al igual que Guatemala, lo que caracteriza a su sistema es mucho más la circulación del poder que la concentración del poder; después de todo, el Perú ha tenido seis presidentes en los últimos siete años. Por eso es que Barrenechea y Vergara (2023) han argumentado que las democracias no solo mueren de concentración de poder, sino del fenómeno que denominan “vaciamiento democrático” (o disolución del poder). En el Perú, la democracia ha quedado vaciada.

Parte importante del proceso por el cual la democracia peruana se ha erosionado está relacionada con el ánimo y acciones preditorias de los representantes de distintas actividades económicas que se infiltran en el régimen democrático. Un ejemplo paradigmático es la influencia que

ejercen las universidades privadas de mala calidad. Estas se han resistido durante años a ser obligadas a tener estándares mínimos de calidad y también a que sus cuentas y finanzas puedan ser auditadas y transparentes. En un buen ejemplo de esta dinámica donde la voluntad de erosionar la capacidad regulatoria del Estado se entrelaza con la destrucción democrática, en 2020 todos los congresistas ligados a los intereses universitarios se sumaron a la destitución del presidente Martín Vizcarra para entronizar al presidente del congreso Manuel Merino, quien solo duró cinco días en el cargo, pero dejó en claro que la desregulación del negocio universitario sería prioritaria en su gobierno. Más recientemente, el gobierno de indiscutible voluntad autoritaria de Dina Boluarte cuenta con el apoyo del *lobby* universitario y ya les ha dado el presente que más ansiaban: la destrucción de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Ya son libres de estafar alumnos y de, eventualmente, lavar los dineros que hagan falta.

Esto es solo un ejemplo. También están los casos ilegales e informales: líderes políticos a los cuales la fiscalía peruana incauta decenas de propiedades por millones de dólares ante la presunción de narcotráfico; alcaldes y congresistas que responden a la minería ilegal, la trata de personas, el transporte informal, el juego de casino (muy efectivos para lavar dinero) y un vasto etcétera. Es importante resaltar que no estamos ante actividades que financian campañas —cosa que hacen, desde luego—, más bien intentan y, muchas veces, consiguen la captura de altas esferas institucionales en los países. En el Ecuador, por ejemplo, se habla abiertamente de los “narcogenerales” y, como hemos visto todos con consternación, se asesinó a un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, y poco tiempo antes habían asesinado al alcalde de la estratégica ciudad portuaria de Manta.

En resumen, en los años del *boom* económico los representantes de diversas actividades económicas, incluidas las criminales, se robustecieron al tiempo que la representación política tradicional se descomponía. Hoy la primera ha terminado torciéndole el cuello a la segunda. Esta dinámica, aunque extrema en Guatemala, Perú y Ecuador, no se limita a estos países. Un libro reciente de Andreas Feldman y Juan Pablo Luna (2023) da cuenta de este proceso enfocándose esencialmente en el narcotráfico. Asimismo, investigaciones como las de Juan Albarracín (2008) muestran

que la política electoral local en América Latina ha sido ya penetrada por estos intereses criminales y la violencia, lo cual desvirtúa la posibilidad de una democracia sustantiva en los niveles subnacionales de gobierno.

IDEAS FINALES

Necesitamos un nuevo mapa de actores antidemocráticos en la región. Por más límites estructurales, institucionales y económicos que las democracias encuentren a su paso, su derrumbe solo ocurre, efectivamente, cuando hay actores dispuestos a derruirlas. Hace algo más de una década, el politólogo Eduardo Dargent (2009) argumentó que la democracia no prosperaba porque nuestros países tenían “demócratas precarios”. Pues en muchos países esos demócratas precarios se convirtieron en abiertos actores antidemocráticos: pasaron del escepticismo al ataque. Y como enseñó el viejo Juan Linz hace mucho, la lealtad o deslealtad de los actores hacia la democracia es un hecho crucial para comprender si estas sobreviven o mueren.

BIBLIOGRAFÍA

- Albarracín, J. (2018). Criminalized Electoral Politics in Brazilian Urban Peripheries. *Crime, Law and Social Change*, 69(4), 553-575. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9761-8>
- Barrenechea, R. y Vergara, A. (2023). Peru: The Danger of Powerless Democracy. *Journal of Democracy*, 34(2), 77-89. <https://doi.org/10.1353/jod.2023.0015>
- Brown, H. y Casullo, M. E. (2023). Democratización y neopatrimonialismo: ¿hay una ola populista en Centroamérica? *Revista Mexicana de Sociología*, 85, núm. especial (agosto), 95-122. <http://mexicanadesociologia.unam.mx/index.php/v85ne2/599-v85ne2a4>
- Dargent, E. (2009). *Demócratas precarios: élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina*. Instituto de Estudios Peruanos.
- Feldmann, A. E. y Luna, J. P. (2023). *Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108955461>
- Linz, J. (1978). *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration. An Introduction*. Johns Hopkins University Press.

- Mainwaring, S. y Pérez-Liñán, A. (2023). Why Latin America's Democracies Are Stuck. *Journal of Democracy*, 34(1), 156-170. <https://doi.org/10.1353/jod.2023.0010>
- Meléndez-Sánchez, M. (2021). Latin America Erupts: Millennial Authoritarianism in El Salvador. *Journal of Democracy*, 32(3), 19-32. <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0031>
- O'Donnell, G. y Schmitter, P. (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Johns Hopkins University Press.
- Sánchez-Sibony, O. (2023). *Understanding the Level and Fate of Democracy in Guatemala: Actor-centered Theory*. En O. Sánchez-Sibony (Ed.), *State-Society Relations in Guatemala. Theory and Practice* (pp. 321-372). Lexington Books.
- Stefanoni, P. (2021). *¿La rebeldía se volvió de derecha?* Editorial Siglo XXI.
- Schwartz, R. e Isaacs, A. (2023). How Guatemala Defied the Odds. *Journal of Democracy*, 34(4), 21-35. <https://doi.org/10.1353/jod.2023.a907685>
- Vergara, A. y Quiñón, A. (2023). ¿De Guatemala a Guateperú? O de cómo mueren las democracias sin dictador. *Foreign Affairs Latinoamérica*, julio-septiembre, 51-62. <https://revistafal.com/numeros-anteriores/fal-23-3/>
- Vommaro, G. (2023). *Milei y la ultraderecha en Argentina: entre el oportunismo y la innovación*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/20671.pdf>